

LUIS CORVALÁN MARQUÉZ

DEL ANTICAPITALISMO
AL NEOLIBERALISMO
EN CHILE

IZQUIERDA, CENTRO Y DERECHA
EN LA LUCHA ENTRE LOS
PROYECTOS GLOBALES. 1950-2000

^TBiblioteca
Todo es Historia
Editorial Sudamericana

golpe del 11 de septiembre editado por CESOC en octubre de 2000. Dado que allí estudio en detalle el comportamiento de los partidos entre 1970 y 1973, en el presente libro me limito, para esos tres años, a un análisis más general sobre el punto, dándole mayor importancia a aspectos tales como la intervención norteamericana, la actitud del gran empresariado y de las FF.AA.

Deseo agradecer a Julio Silva Solar, director de CESOC, el haberme autorizado para hacer las referidas transcripciones de mi anterior libro. También a Pedro Pablo Zegers, secretario de redacción de la revista *Mapocho*, de la Biblioteca Nacional, por análogo proceder respecto de dos artículos publicados en esa revista, y que en el presente texto figuran, con leves modificaciones, como el capítulo tres de la segunda parte y cuatro de la tercera.

Quiero, igualmente, agradecer a Sonia Correa el haber leído el original de este texto. Y a Erika Helbig su eficiente trabajo de impresión preliminar.

Deseo, por último, dedicar este libro a mi hija Alejandra. Ella es la persona a quien más amo y esta dedicatoria representa otra manera de recordárselo.

Calera de Tango, 15 de mayo de 2001

NOTAS

¹ Mario Góngora, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX* (Santiago, La Ciudad, 1981), p. 130.

INTRODUCCIÓN

UNA HISTORIA DE MEDIO SIGLO Y SU TIEMPO EJE¹



QUIZÁ LA historia política de la segunda mitad del siglo XX pueda ser vista desde un suceso en particular, a saber, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Esta fecha constituye, sin dudas, un punto nodal de nuestra historia contemporánea. Ello en la medida en que dirimió una serie de alternativas planteadas al país desde los tempranos cincuenta.

En este sentido me parece ver en los tres años que duró el gobierno de Salvador Allende el tiempo eje de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Durante el lapso previo a ese tiempo, es decir, a partir de los cincuenta, comenzaron a levantarse tres proyectos globales que, con sus respectivos apoyos sociales y políticos, lucharon por imponerse. Entre 1970 y 1973 se crearon todas las condiciones para el desenlace de esas luchas, cuestión que, como se dijo, se produjo mediante el golpe del 11 de septiembre de 1973, no sin mediar una fuerte intervención norteamericana. Luego se implementó el proyecto triunfante, primero bajo la dictadura militar, y luego bajo la administración concertacionista. Y así se cerró el siglo.

¿En qué consistieron los mencionados tres proyectos globales? En distintas propuestas de patrones de desarrollo para el país, cada una levantada y defendida por sectores sociales y políticos diferentes en concordancia con sus intereses. Tales proyectos, adicionalmente, se elaboraron como una respuesta al agotamiento del patrón de desarrollo preexistente, esto es, el sustitutivo de importaciones que a lo menos venía implementándose desde los años treinta en adelante.

Para contextualizar mejor el surgimiento de los referidos proyectos globales y las correlativas luchas a que dieron lugar, se hace necesario aportar, aunque sea esquemáticamente, algunos antecedentes históricos relativos a la primera mitad del siglo.

I. LOS ANTECEDENTES: LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. UN ESQUEMA DE APROXIMACIÓN

AL MENOS entre 1891 y los años siguientes a la Primera Guerra Mundial existió en Chile un patrón de desarrollo que llamaremos oligárquico monoexportador. Sus rasgos principales consistían en una economía orientada "hacia afuera", sustentada principalmente en la exportación salitrera; en una estructura social muy polarizada, hegemonizada por una poderosa oligarquía, y excluyente de los sectores medios y bajos; un régimen político institucional parlamentario que expresaba el predominio de la elite oligárquica; una hegemonía cultural de tipo liberal y una inserción internacional que marcaba una dependencia respecto de Inglaterra.²

Este patrón de desarrollo entró en crisis ya durante la Primera Guerra Mundial, lo que dio origen a considerables conmociones. En el plano de la política ello se manifestó en que, entre otras cosas, junto a la emergencia de nuevos sujetos, como las clases medias y obreras, en los años siguientes, en particular desde 1924 en adelante, se dio lugar a la ruptura del orden institucional, lo que conllevó el derrumbe del régimen parlamentario y las formas tradicionales de dominación de la oligarquía. Mediante la irrupción de los militares a la vida política —cuya oficialidad joven en alguna medida expresaba la sensibilidad de ciertas clases medias animadas de un espíritu de reforma—, se reemplazó el régimen parlamentario por uno de presidencialismo fuerte.³

En el contexto de estas nuevas realidades políticas, el país vio acelerada una serie de cambios en todas las esferas de la vida. Como resultado de ello en la década de los treinta, especialmente luego de que pasaran los efectos más devastadores de la crisis del 29, la sociedad chilena, en efecto, en lo económico pasó a sustentarse en un tipo de desarrollo hacia adentro, empeñado en una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones y un capitalismo regulado que suponía alta intervención del Estado. En lo social se fue consolidando un orden caracterizado por una diversificación y modernización de la clase alta, con un crecimiento, mayor organización y fortalecimiento de la capacidad de negociación dentro del sistema por parte de los sectores medios y obreros. En lo político se consagró un régimen de presidencialismo fuerte en donde, por lo demás, se daba una mediación del dominio de los grupos oligárquicos a través de una mesocracia. En la cultura la hegemonía de las visiones liberales cedió ante distintas concepciones socializantes. Todo en el marco de una inserción internacional caracterizada por la dependencia respecto a EE.UU. En resumen, terminó implantándose a plenitud un nuevo patrón de desarrollo, que convencionalmente llamaremos patrón mesocrático sustitutivo de importaciones.

Detengámonos brevemente en un rasgo fundamental que este nuevo patrón de desarrollo evidenció en los planos político y social. Digamos que durante él, en efecto, se constituyó el llamado "Estado de compromiso",⁴ que, por un lado supuso un consenso mayoritario del país en torno a la estrategia de indus-

trialización sustitutiva y al rol regulador del Estado. Al mismo tiempo que, por el otro, implicó una modalidad de estructuración del poder de acuerdo a la cual, como se dijo anteriormente, los grupos oligárquicos reformularon su forma de dominación, mediatizándola a través de un régimen mesocrático. Se consolidó así un orden en que las clases medias se insertaron crecientemente en la gestión del Estado y adquirieron determinadas cuotas de influencia en él. A la par, los sectores trabajadores vieron reconocidas sus organizaciones por el orden jurídico y político y adquirieron creciente capacidad para presionar por sus intereses corporativos.

Este resultado supuso que la radicalización que anteriormente habían evidenciado ciertos sectores obreros y de las propias clases medias pudo ahora canalizarse institucionalmente. Y por lo mismo, morigerarse. En el régimen de partidos ello se tradujo en que las colectividades extrasistema terminaron integrándose al orden existente, aunque contribuyendo a su modificación en el sentido mesocrático previamente referido. Tales fueron especialmente los casos del Partido Socialista (PS) y del Partido Comunista (PC), quienes pasaron a reemplazar su inicial énfasis en la revolución por otro, centrado en la democratización, en cuyo marco los sujetos populares que de algún modo representaban, más que destruir desde sus bases mismas el orden establecido, podrían pasar a negociar dentro de él en mejores condiciones sus reivindicaciones.⁵

De tal modo, el régimen mesocrático constituyó un complejo entramado de intereses diversos que supuso delicados equilibrios, donde se consideraban en mayor o menor medida las demandas de los diversos estratos sociales (con excepción del campesinado), aunque manteniéndose el predominio, ahora mediatizado mesocráticamente, de los modernizados grupos oligárquicos.

Bajo tales supuestos advino en la política chilena una fase donde predominaron los consensos, lo que fortaleció el orden institucional, demarcado por la Constitución de 1925 que terminó siendo reconocida por los diferentes actores como el marco legítimo para dirimir los conflictos.

Dichos consensos tuvieron, adicionalmente, otras consecuencias políticas y estatales. Por un lado, en efecto, favorecieron el desarrollo de la ciudadanía. Por el otro, incentivaron un estilo transaccional de procesamiento de las diferencias.

Lo anterior vino unido a la legitimación de los actores sociales y políticos participantes en ese consenso, los que pasaron a limitar su accionar a los marcos constitucionales.

Todos estos fenómenos, por cierto, constituyeron los contenidos de un claro proceso de democratización del sistema político. Dentro de éste, así, todos tuvieron un lugar, desde la derecha conservadora hasta la izquierda comunista y socialista, la que, como se dijo, oportunamente había cambiado su énfasis en la revolución por un acento en la democratización. Se excluyeron sólo los grupos nacionalistas —ideológicamente cercanos a los modelos nazi-fascistas—, pero no porque existiera un mecanismo formal que los discriminara, sino en razón de que no lograron un apoyo ciudadano suficiente para constituirse en actores nacionales.

El eje de todo el sistema era el Partido Radical (PR). Éste, con su gran pragmatismo y capacidad de negociación tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, era el principal articulador de los consensos. Sin perjuicio de que desde finales de los treinta se insertara en el gobierno en base a una alianza izquierdista.

En este contexto, las demandas de los distintos sectores sociales, a través de los partidos repercutían en el sistema institucional, donde buscaban satisfacción, estimulando así la participación cívica.

Las mencionadas tendencias democratizadoras, sin embargo, se vieron morigeradas al final del período debido a factores internacionales. La Guerra Fría, en efecto, trastocó las alianzas existentes. Las presiones norteamericanas expresadas en la doctrina Truman se tradujeron en la ruptura de la alianza entre el centro radical y la izquierda, en particular comunista y, más aún, influyeron decisivamente en la promulgación de la "Ley de Defensa de la Democracia", que excluyó al PC del sistema político.

Este partido, sin embargo, lejos de optar por una alternativa antisistémica, intentará reinsertarse en el orden institucional por la vía de intentar su redemocratización, cosa que se logrará recién en el período siguiente, a fines de los cincuenta, mediante la conformación del Bloque de Saneamiento Democrático.

Pues bien, bajo el marco del patrón de desarrollo mesocrático sustitutivo de importaciones el país experimentó un considerable proceso de modernización del que los distintos suscriptores del Estado de compromiso, en mayor o menor medida, se beneficiaron. Dicho proceso de modernización encontró su apogeo durante los gobiernos radicales, culminando así la historia de la primera mitad del siglo XX.

2. LA EMERGENCIA DE LOS PROYECTOS GLOBALES: ELEMENTO CLAVE EN LA HISTORIA POLÍTICA DE CHILE DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

SIN EMBARGO, el patrón de desarrollo mesocrático sustitutivo de importaciones terminó agotándose a comienzos de los cincuenta.⁶ Frente a tal agotamiento surgirá una serie de cuestionamientos sobre su pertinencia, lo que dará lugar a la aparición de los proyectos globales. Esos proyectos irán emergiendo con más nitidez a partir de mediados de la década de los cincuenta. En particular luego de que se fuera haciendo evidente el fracaso del Gobierno de Carlos Ibáñez, con el consiguiente desencanto producido entre su heterogénea base social y política.

El régimen ibañista —que se impusiera abrumadoramente en las presidenciales de 1952—, en cierto modo expresó las efímeras ilusiones generadas por el desprestigio del régimen de partidos y sus estilos transaccionales verificados durante la implantación y consolidación del patrón de desarrollo mesocrático sustitutivo de importaciones. Hasta cierto punto ese desprestigio podría ser entendido como una de las tantas manifestaciones del agotamiento y crisis

de dicho patrón. Sólo que el Gobierno de Ibáñez, con sus arrestos autoritarios y antipartidarios y con sus apoyos provenientes en parte de los grupos nacionalistas de extrema derecha —que desde la Segunda Guerra Mundial habían evolucionado hacia posiciones hispanistas—, no pudo ofrecer ninguna alternativa de fondo a tal crisis.

Esto dio lugar a la recuperación de los partidos, lo que marcó el fracaso de los grupos de la derecha nacionalista que habían visto en el general Ibáñez la posibilidad de llevar a la práctica su ideario antiliberal.

En gran medida serán precisamente los partidos quienes elaborarán las respuestas a la crisis del agotado patrón sustitutivo de importaciones. Tal cosa ocurrirá mediante la elaboración de diversos proyectos globales, cuya significación esencial de hecho consistía en postular un tránsito hacia otro patrón de desarrollo.⁷ Cabe señalar al respecto que dichos proyectos no emergieron como entidades terminadas definitivamente. Por el contrario, se fueron sucesivamente desarrollando y perfilando al calor de los avatares de las diversas situaciones que experimentaba el país, y no sin confrontación al interior de los sectores a los que correspondían.

En este contexto fue que comenzó a verificarse un proceso de transformación del centro político. El PR —que había sido la principal fuerza durante la implantación y afianzamiento del patrón mesocrático sustitutivo de importaciones— comenzó, en efecto, una sostenida decadencia y terminó siendo desplazado por el emergente Partido Demócrata Cristiano (PDC) el que, a diferencia de aquél, rechazó el pragmatismo, y asumió de hecho una postura ideologizada y antialiancista.

Al mismo tiempo habían venido surgiendo los tres proyectos globales. Por un lado se levantó el de la Democracia Cristiana, apoyado sobre todo por los sectores medios, especialmente profesionales y técnicos, juveniles y poblacionales. Este proyecto, en su fase más madura, es decir, durante los sesenta, terminó propiciando una serie de "transformaciones estructurales" destinadas a modernizar la sociedad. Proponía una reforma agraria que, al distribuir la tierra y al formar una capa de campesinos prósperos, abriría un mercado interno a la industria nacional. El proyecto proponía también la asociación entre el Estado y las empresas norteamericanas dueñas de la gran minería del cobre a través de la llamada chilenización, lo que debía permitir acrecentar las inversiones en el rubro y generar, con el pertinente aumento de la producción y las exportaciones, ingresos adicionales en moneda dura que el Estado emplearía en el desarrollo social y económico. El proyecto contemplaba también estimular los procesos de integración subregional a fin de ensanchar los mercados a la industria nacional. Todo ello se complementaba con ciertas medidas redistributivas y con el estímulo a la organización del campesinado y los pobladores, a lo que se agregaba una reforma a la empresa.

Por otro lado figuraba el proyecto de la izquierda, articulada en el Frente de Acción Popular (FRAP), creado en 1956, cuyo núcleo estaba conformado por el PC y el PS. Su base social se ordenaba en torno al proletariado organizado, esencialmente en la Central Única de Trabajadores (CUT), incluyendo ade-

más a cierta intelectualidad y a algunos estratos medios empobrecidos.⁸ El proyecto de la izquierda partía del supuesto según el cual la crisis del patrón de desarrollo mesocrático sustitutivo de importaciones era la expresión de la crisis del capitalismo como tal. Desde esta premisa su propuesta se encaminaba hacia la construcción de una sociedad socialista. Claro está que en esa perspectiva sus partidos eje tenían profundas discrepancias. Así, mientras que el PC veía el socialismo como un punto de llegada relativamente lejano, al que había que aproximarse a través de transformaciones sucesivas de carácter antiimperialistas y antioligárquicas, el PS consideró que era una meta inmediata. De esta diferencia de fondo se derivaba otra serie de discrepancias en cuanto a las alianzas y a las vías a seguir. De allí que pueda considerarse que en la izquierda, en el fondo, coexistían dos proyectos distintos que aparentaban ser uno solo con diferencias tácticas.

En todo caso, había medidas que eran aceptadas por el FRAP en su conjunto, tales como la nacionalización de las riquezas básicas que estaban en manos del capital extranjero, la estatización de la banca, de los monopolios y del comercio exterior. A lo que se agregaba una reforma agraria destinada a abolir el latifundio. Todo debía ir unido a ciertas transformaciones en el Estado que permitieran que el poder político fuera pasando a los trabajadores y al pueblo en general.

También la derecha levantó su propio proyecto global, sustentado esencialmente en el gran empresariado industrial, agrario y de las finanzas, el que posteriormente desembocará en el modelo neoliberal impuesto a partir de 1974 en adelante.⁹ Este proyecto suscitaba también el apoyo de la burguesía media, de la pequeña burguesía y de las clases medias conservadoras. Postulaba un desarrollo nacional basado en la empresa privada y la inversión extranjera, la gradual apertura de la economía al exterior, el fin del Estado empresario y la desregulación estatal de importantes aspectos de la economía, los que, a su juicio, debían quedar sujetos a los mecanismos de mercado. En lo político impulsaba una vigorización del Poder Ejecutivo, cuyo correlato era una crítica a la "demagogia" y a la "politiquería" y una defensa de la naturaleza técnica de las decisiones de la autoridad.

Entre estos tres proyectos se desencadenará una lucha que se irá agudizando progresivamente. Ello —en particular desde los 60 en adelante— se tradujo en nuevas modalidades de hacer política, cuyo rasgo fundamental consistirá en un estilo cada vez más confrontacional, ideologizado y antialiancista. Tal situación, obviamente, implicaba el término de los consensos que habían caracterizado la vida política nacional en las décadas anteriores.

3. EL MARCO SOCIETAL: EXTREMA DESIGUALDAD ENTRE RICOS Y POBRES Y CONCIENCIA DE LA CRISIS

HAY QUE considerar, por otra parte, que la aguda lucha que se abrirá entre los mencionados tres proyectos globales se dio en el contexto de una sociedad ca-

racterizada por grandes contrastes entre riqueza y pobreza, lo cual constituye un dato esencial para comprender lo que vendrá. En ese marco, los estratos postergados de la población; los crecientes sectores obreros y luego los campesinos que se incorporarán a la vida nacional producto de las transformaciones agrarias verificadas bajo el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, entre otros, llegaron a tener conciencia de su situación desmedrada, en parte dada su propia experiencia, en parte debido a la crítica de los estratos intelectuales y, en fin, en parte no menos importante en virtud de la acción proselitista y crítica de los partidos de izquierda así como también de la emergente Democracia Cristiana.

Las mencionadas extremas desigualdades económicas y sociales pasarán a entenderse por sectores cada vez más amplios de la sociedad chilena, como resultantes tanto de las estructuras vigentes consideradas como caducas, así también como la consecuencia del predominio económico y político de las clases altas, empresariales y terratenientes, a las cuales se percibirá como insensibles al sufrimiento de las mayorías nacionales. Es que aquéllas, en realidad, habían fracasado en proporcionar al conjunto del país cuotas aceptables de equidad y de nivel de vida.

Jorge Ahumada, en un notable libro publicado en 1958, con el sugestivo título de *En vez de la miseria*,¹⁰ da cuenta de las descritas desigualdades e inequidades de la sociedad chilena de la época, al tiempo que expresó la conciencia que se abría paso en el país en el sentido de que ellas eran una manifestación de una profunda crisis a la que cabía anteponer soluciones globales.

Ahumada, en efecto, sostiene: "una nación que reúne todas las condiciones para que sus habitantes disfruten de una vida digna y llena de posibilidades, ofrece, en cambio, el espectáculo de la sórdida pobreza de los más, en contraste tan agudo con la ostentación orgullosa de los menos, que hiere la pupila del observador más distraído".¹¹ "Es difícil —continúa— encontrar en América Latina otra ciudad como Santiago, con residencias tan lujosas y poblaciones 'callampas' tan miserables". Y agrega: "llama la atención la actitud despectiva y protectora con que las personas de posición social tratan a los pobres y el odio con que los pobres responden al desprecio de los ricos".¹² Y concluye señalando que "existe (...) una conciencia nacional de que el país está en crisis y hay manifestaciones evidentes de ansiedad por encontrar soluciones".¹³ Bajo estos supuestos es que Ahumada sostiene que esa crisis tenía un carácter "integral", frente a lo cual no cabían soluciones parciales, sino globales.

Hasta cierto punto se podría sostener que el ascenso al protagonismo político y social de crecientes sectores medios y populares con posturas cada vez más radicalizadas y críticas verificado desde mediados de los cincuenta constituyó una de las respuestas al fracaso de las clases dirigentes señalado anteriormente y a las desigualdades extremas que caracterizaban a la sociedad chilena. Y la agudización de los conflictos que se anunciaban no vendría a expresar únicamente la voluntad de cambio de las mayorías por años postergadas, sino también la voluntad de los estratos altos por mantener su condición de dirigen-

tes de la sociedad, ganar aliados evitando su aislamiento, resistir la impugnación de que eran objeto y, en fin, imponer sus propias soluciones a la crisis en curso. Ése fue el terreno en el que se desarrolló la lucha entre los proyectos globales referidos arriba.

4. LOS TRES TERCIOS Y SU CORRELACIÓN CON LOS PROYECTOS GLOBALES

AHORA BIEN, en el plano de la política contingente, el enfrentamiento entre los distintos proyectos globales en cierto sentido dio paso a una específica estructuración del cuadro partidario, cuyo rasgo fundamental consistió en la conformación de los tres tercios —derecha, centro e izquierda— donde cada uno de estos bloques constituía la base política de los proyectos globales descritos arriba. Cada uno de ellos intentaba dotarse de sus correspondientes legitimidades ideológicas tratando a la par de ampliar al máximo sus apoyos sociales.

Desde nuestra óptica de análisis, el agotamiento del patrón de desarrollo mesocrático sustitutivo de importaciones, seguido de la correlativa emergencia de los proyectos globales, que de hecho buscaban su reemplazo, marca los inicios de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Esta historia, desde la perspectiva que hemos elegido —como se dijo previamente—, tendría por contenido principal la lucha entre los tres señalados proyectos globales, su resolución entre 1970-1973, y la implementación a plenitud de uno de ellos durante el resto del siglo.

En el contexto de la emergencia y lucha entre los mencionados proyectos globales se produjo, de otra parte, una nueva oleada de desarrollo de la ciudadanía y de la democratización del sistema político. Así, en 1957, en el Congreso Nacional se conformó el llamado Bloque de Saneamiento Democrático. Mediante su acción fue derogada la Ley de Defensa de la Democracia y se restableció la legalidad del PC. También se democratizó el sistema electoral a través de la instauración de la cédula única, lo que hizo imposible el cohecho.

Inmediatamente después de que se verificaran estos cambios, se realizaron las elecciones presidenciales de 1958, en las que se produjo una importante alza del FRAP, cuyo candidato, Salvador Allende, estuvo a punto de llegar a la Presidencia. También mostró sus grandes potencialidades el naciente PDC, que obtuviera el tercer lugar con su líder Eduardo Frei Montalva. A la par que el PR evidenció su repliegue, tendiendo a ser reemplazado por el PDC como el principal partido de centro. La derecha, a través de Jorge Alessandri Rodríguez, que se presentó como independiente, obtuvo un estrecho triunfo, en gran medida en razón de la proliferación de las candidaturas. Y en particular gracias a la de Zamorano, el cura de Catapilco, que capturó parte de la votación popular que eventualmente habría apoyado a Salvador Allende.

Así se llegó a la década de los 60 que, sin dudas, se presentó con perfiles particulares. Claro está, la lucha entre los proyectos globales se intensificó durante ella, con la particularidad de que se viera influida por factores externos. Éstos estuvieron conformados especialmente por el triunfo de la revolución cubana en 1959 y por las medidas que en su contra tomara EE UU.

La Revolución Cubana en el fondo significó un desafío para la hegemonía norteamericana en la región. En efecto, el ethos revolucionario que inspirara, en sus distintas variantes y grados, se extendió entonces por el continente teniendo en el antiimperialismo un componente fundamental. Dicha revolución, por otro lado, se constituyó en un engranaje más del balance de poder entre las grandes potencias involucradas en la Guerra Fría.

En ese cuadro, Washington reaccionó de una manera dual. Le dio creciente importancia a las teorías de la contrainsurgencia y de la Seguridad Nacional que había venido introduciendo en los ejércitos latinoamericanos. A partir de aquí reorientó a éstos en la dirección de combatir al "enemigo interno", que, según dichas doctrinas, estaría constituido por las fuerzas de izquierda. Bajo este concepto, estimuló la emergencia de dictaduras militares, como la establecida en Brasil en 1964.

La otra cara de la reacción norteamericana fue la creación de la Alianza para el Progreso, concebida como un programa de masiva ayuda económica a los países de la región, condicionada a que llevaran a cabo transformaciones destinadas a remover las estructuras tradicionales, a las que se atribuía generar las premisas que estimulaban y hacían posible el camino cubano.

Esas condiciones internacionales repercutieron en Chile a lo menos de cuatro maneras. En primer término, favorecieron la radicalización de un sector de la izquierda que vio en la revolución cubana el camino a seguir. Es decir, este sector consideró que la vía armada era la que correspondía implementar como estrategia hacia el socialismo. Fue el caso del PS. También del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fundado a mediados de los sesenta. Tales fenómenos ahondaron los crónicos desencuentros en la izquierda por cuanto el PC insistió en sus tesis tradicionales sobre la vía pacífica e institucional.

En segundo término, las descritas condiciones internacionales convirtieron al PDC en el modelo a contraponer a la amenaza de la revolución. El supuesto norteamericano de que ésta era evitable sólo si se emprendían procesos modernizadores en la región encontró en el PDC y en las condiciones chilenas el prototipo ideal para ser llevado a cabo. De allí que esa colectividad recibiera el máximo apoyo norteamericano.¹⁴ A Washington le parecía que una alternativa progresista a la revolución era mucho más eficaz que una respuesta conservadora y tradicional. Incluso la otra opción, la de las dictaduras militares, tampoco era considerada como una respuesta tradicional sino funcional a un capitalismo modernizador.

En tercer término, las condiciones señaladas dieron paso a una verdadera crisis de la derecha. Ésta, en efecto, tendió a verse sobrepasada por el ethos

cultural progresista o revolucionario que empezó a invadirlo todo. Su respuesta, crecientemente defensiva, tendió entonces hacia fórmulas autoritarias. Pronto influyó poderosamente en ella la derecha nacionalista, que había sufrido un gran fracaso con el Gobierno del general Ibáñez. Desilusionada de los caudillos, y carente de apoyo ciudadano, la derecha nacionalista puso su vista en las FF.AA., a las que consideraba como las encargadas de llevar a la práctica sus concepciones autoritarias y antiliberales.

En cuarto lugar, en las FF.AA. la penetración de las doctrinas de la Seguridad Nacional reforzó las difusas concepciones antiliberales que existían entre sus miembros, a despecho de su adhesión formal al orden constitucional. Esto se vio acrecentado por el adoctrinamiento técnico e ideológico de sus oficiales en las escuelas que para el efecto dispusieron los EE.UU. en la zona del canal de Panamá. Tal cosa, como lo señalara el propio general Carlos Prats, dio lugar en las FF.AA. chilenas a generaciones enteras de oficiales de marcada mentalidad pro norteamericana.¹⁵ Todo ello, y la evolución misma del proceso político nacional, pronto se traducirá en que la mencionada adhesión de los uniformados al orden constitucional se verá crecientemente socabada.

Pues bien, en estas condiciones la lucha entre los tres proyectos globales, como se dijo con anterioridad, tendió crecientemente a agudizarse. Ello se hizo más evidente aún cuando se produjo el fracaso del Gobierno de Jorge Alessandri y se abrió paso con inédita fuerza la idea del cambio sistémico, encarnada tanto en la DC y su "revolución en libertad" como en el FRAP.

Las elecciones de 1964 evidenciaron que las alternativas reales eran precisamente aquellas que propiciaban el cambio. Tanto fue así que ante el temor al "mal mayor", representado por la acrecida izquierda, la derecha retiró su candidatura y apoyó incondicionalmente la del PDC, la que de tal modo resultó vencedora llevando a la Presidencia a Eduardo Frei Montalva.

Esa campaña fue paradigmática en muchos sentidos. Desde ya marcó un gran involucramiento de EE.UU. a través del financiamiento de actividades propagandísticas a gran escala en contra de la izquierda, conformando lo que después se denominó como "campañas del terror".¹⁶ Sin dudas tales campañas —que se reiterarían en 1970— fueron un importante factor de desquiciamiento del clima psicológico y político nacional, y una de las causas de la polarización política en curso, que terminaría por amenazar la persistencia del marco institucional de los conflictos.

El otro factor polarizador fue la implementación por el Gobierno democratacristiano, de las transformaciones estructurales contempladas en su programa. En tal sentido cabe especialmente destacar la Reforma Agraria, que puso fin a la estructura tradicional de la propiedad en el agro. También debe mencionarse el surgimiento de nuevos sujetos populares, como fue el campesinado organizado como producto de la ley de sindicalización campesina, a lo que hay que sumar la emergencia del movimiento poblacional.

La derecha vio en dichas medidas una amenaza de fondo. La Reforma Agraria, a su juicio, no haría más que preludiar atentados similares a la propie-

dad en otros ámbitos. Y el desarrollo de la organización de nuevos sectores populares contribuiría al permanente esfuerzo de la izquierda orientado a levantar a los estratos subalternos en contra del orden establecido.

Lo cierto fue que la alarma que cundió en la derecha respondía al hecho de que el conjunto del escenario social y político, ante el potenciamiento de los actores mesocráticos y populares, se iba a ojos vistas desplazando hacia la izquierda. El mismo centro demócrata cristiano desarrolló en su seno crecientes corrientes izquierdistas. La cultura nacional devino mayoritariamente en progresista o revolucionaria. Y lo tradicional tendió a desprestigiarse. Una clara señal de ello fue el desastre electoral que los partidos Conservador y Liberal sufrieran en las parlamentarias de 1965, lo que casi los hizo desaparecer del escenario, cuestión que obligó a la derecha a refundarse a través de la creación del Partido Nacional (PN).

La creación de este conglomerado vino a significar una verdadera penetración de la derecha nacionalista en la derecha tradicional, tanto en lo ideológico, en lo político, como en sus liderazgos. En este último sentido, destaca el caso de Sergio Onofre Jarpa, de larga trayectoria en diferentes movimientos nacionalistas. La formación del PN, en fin, significó un punto clave en el proceso de transición de la derecha desde el liberalismo al nacionalismo, cuestión que tuvo enormes consecuencias para el país.

Durante la segunda mitad de los 60 las movilizaciones sociales de los distintos estratos de la población en aras de sus reivindicaciones sociopolíticas se vieron aumentadas notoriamente. Paralelamente continuó el proceso de democratización del sistema institucional. Así, durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva se reformó la Constitución otorgando la ciudadanía a los mayores de 18 años y a los analfabetos, al tiempo que la participación de la población en las distintas instancias sociales y políticas se volvía una norma. No fue casualidad entonces que los grados de politización de la sociedad aumentaran notoriamente.

En el contexto de esos procesos —cuyo trasfondo seguía siendo la competencia entre los referidos tres proyectos globales— hubo partidos que siguieron apegados a las concepciones gradualistas e institucionales, mientras que otros, buscando desenlaces integrales, asumieron visiones más bien rupturistas y protorrupturistas.

Entenderemos por concepciones gradualistas e institucionales a aquellas que buscaban mantener el marco institucional de los conflictos, respetando por tanto sus normas, aunque fuese con el fin de modificar dicho marco desde su interior y llevar a cabo un cambio social general.

Entenderemos por concepciones rupturistas a aquellas que tendían a deslegitimar el marco institucional de los crecientes conflictos políticos y sociales y que buscaban imponer sus proyectos mediante desenlaces integrales, lo que, en fin, suponía de una u otra forma la ruptura del orden institucional, sea por la vía de un golpe de Estado, una revolución armada u otros medios análogos. Entenderemos por protorrupturismo a una lógica política que, sin ser todavía rupturista, avanzaba en esa dirección.

Los partidos gradualistas e institucionales eran –aparte del PR– el Demócrata Cristiano, con su apego al orden constitucional entendido como el único marco legítimo de la realización de los cambios estructurales que esta colectividad propiciaba, y el Comunista, con su concepción de la vía pacífica y electoral para acceder gradualmente al socialismo a través de una serie de fases intermedias. Entre las colectividades rupturistas a nuestro juicio figuraba el PS y el MIR, quienes, bajo la influencia de la Revolución Cubana, explícitamente pasaron a reivindicar la lucha armada y la ruptura de la institucionalidad burguesa como medio para avanzar al socialismo.

Mientras que el PN, es decir la derecha refundada en 1966 luego del desastre electoral que sufriera el año anterior, representaba una lógica protorrupturista. Tal lógica, en lo esencial, fue una reacción al descrito potenciamiento que dentro del estado de compromiso empezaron a tener desde los 50 y 60 los sujetos mesocráticos y populares. Tales procesos, como vimos, terminaron por poner a la defensiva a las fuerzas del empresariado y de la derecha, los que pasaron a sentirse crecientemente amenazados. Ello, por cierto, es un factor explicativo de su evolución hacia posiciones autoritarias y de hecho contrarias a los procesos de democratización en curso. En tal contexto, la derecha refundada se apartó del liberalismo y asumió la ideología nacionalista, puso sus ojos en las FF.AA. y, en parte, se fusionó con la derecha nacionalista la que, como hemos visto, consideraba a los uniformados como el órgano destinado a materializar sus concepciones.

Desde tales reformulaciones orgánicas, políticas e ideológicas, la derecha pasó a considerar que al orden institucional existente le era consustancial una serie de vicios de fondo (como la demagogia y politiquería), los que condicionarían una crisis en los más diversos planos de la vida social, conduciendo así a la nación como tal a su decadencia y aun a su desintegración. En virtud de ello, esta derecha se propuso reestructurar el Estado y avanzar hacia un régimen de orden y autoridad, que le permitiera instaurar su propio proyecto de modernización entendido como la premisa para la recuperación de Chile y su proyección futura como una gran nación.¹⁷ Con tales miras intentó conformar un bloque con los sectores empresariales, ciertas clases medias y los militares. Estas fuerzas debían ser las bases de apoyo para la instauración de una “Nueva República”.

Pero lo más importante al respecto radica en que su crisis de hegemonía y su insuficiente base electoral, no permitían que la derecha, a través de la vía institucional, se defendiera eficientemente de los cambios propiciados por el Gobierno de la DC, detuviera el alza de la izquierda y de los distintos sujetos populares, y asegurara la implantación de su propio proyecto de modernización capitalista.¹⁸ De allí que, de hecho, avanzara gradualmente hacia un tático protorrupturismo –con su correspondiente fe en los militares– que se vio transitoriamente morigerado ante sus expectativas de triunfar en las elecciones presidenciales de 1970.

Tal evolución de la derecha –así como también la influencia de EE.UU. en las FF.AA., manifestada, entre otras cosas, en la recepción por los uniformados

de las doctrinas de la Seguridad Nacional–, será decisiva en los hechos venideros. Tanto más cuanto que el PN iniciará un sistemático acercamiento a los militares apoyando sus reivindicaciones corporativas y estimulando su histórico resentimiento hacia la clase política y el régimen demoliberal. Por el momento, sin embargo, no obtuvo mucho. Aunque el acuartelamiento del general Víaux en el Regimiento Tacna en octubre de 1969 –sin dudas, un fallido golpe de Estado– marcó la pauta que definitivamente terminaría imponiéndose.

6. ¿FUERON LOS SESENTA UNA DÉCADA DE VIOLENCIA POLÍTICA?

LA LUCHA entre los proyectos globales durante los sesenta, a contrapelo de lo que sostiene la derecha y los militares, no devino en violencia política generalizada. Esta década, en efecto, no se caracterizó por la violencia. Por el contrario, los conflictos que se verificaron a lo largo de ella todavía se canalizaron institucionalmente. Hechos aislados, como el intento de golpe de Víaux, o ciertos asaltos a bancos por parte del MIR, no le dieron su carácter al período.

La tesis sobre los 60 como década de violencia política, que figura tanto en el informe Rettig como en el documento aprobado por la Mesa de Diálogo, en el fondo constituyó una moneda de cambio al reconocimiento que hicieran ambos textos sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la dictadura militar.

Desde la lógica de la política todo eso es muy comprensible. Pero la historiografía no está obligada a compartir acríticamente las representaciones ideológicas de los actores de una coyuntura determinada y asumir sus contenidos como si constituyeran la “verdad histórica”. Menos aún cuando esas representaciones no calzan con los datos empíricos de que se dispone. El historiador, evidentemente, puede explicarse por qué ellas se han formado. Pero su juicio ha de mantenerse independiente y estructurarse crítica y autónomamente.

Desde esos supuestos es que afirmamos que la lucha política, aunque exacerbada, se mantuvo durante los 60 dentro de los marcos institucionales, sin devenir en violencia generalizada. En ese entonces el MIR era una naciente fuerza marginal, y los asaltos a bancos que llevara a cabo constituían hechos aislados, secundarios, producidos en la fase final del Gobierno del Presidente Frei. El PS, que en su Congreso de Chillán proclamara la necesidad de la lucha armada, nunca la llevó a la práctica. Siguió participando de las elecciones, en el Parlamento y en el debate público.

La adhesión de este partido a la lucha armada hay que comprenderla más bien como una manifestación de su naturaleza. El PS, en efecto, pese a su influencia en sectores populares, era un partido formado esencialmente por sectores provenientes de la pequeña burguesía y de las clases medias intelectuales, altamente ideologizados y sensibles a las modas de la izquierda mundial, a las que siempre adhirió retóricamente. Fue en tal calidad que recibió el influjo de la Revolución Cubana.

Eso es lo que explica el hecho de que, en la medida en que se acercaban las elecciones presidenciales de 1970, el PS no tomara iniciativas significativas destinadas a cerrar el paso a la materialización de la tesis del PC, y del propio Salvador Allende, según la cual el camino al socialismo debía recorrerse mediante una vía pacífica e institucional; del mismo modo como tampoco impidió que se llevara a cabo el planteamiento que postulaba la necesidad de que la izquierda se abriera hacia el centro. Frente a ello, claro está, se limitó al despliegue de una retórica que se agotaba en sí misma; sin perjuicio de lo cual, sin dudas, no dejó de causar temor en determinados sectores de la derecha y el centro.

Por su parte, los sujetos mesocráticos y populares a lo largo de la década desplegaron su acción haciendo uso de las garantías que les otorgaba el orden institucional. Las manifestaciones callejeras, las huelgas y los debates eran derechos que el régimen político otorgaba a todos los sectores, no sólo a los estratos dirigentes. Y el que los sujetos mesocráticos y populares hicieran un uso pleno de ellos no puede ser entendido como manifestación de violencia política. Menos aún cuando en la cultura popular y mesocrática toda la movilización social y reivindicativa se entendía finalmente articulada con las elecciones, fuesen parlamentarias, presidenciales o de otra índole. Es decir, eran vinculadas a procedimientos que por naturaleza eran cívicos.

La década de los 60, adicionalmente, fue también un período histórico en el cual el respeto a las diferencias, el pluralismo y la no exclusión alcanzó sus cotas más altas en la historia política nacional, prolongándose este rasgo hasta los primeros años de los 70. Todo era intrasistema. Éste era totalmente inclusivo. Los conflictos se ventilaban institucionalmente en su interior. Y tal cosa, por cierto, no calza con un esquema de violencia política generalizada.

Y pese a que se trataba de una época signada por la lucha entre tres proyectos globales distintos, con sus correspondientes utopismos, no es menos cierto que en ella no faltaron los grandes consensos, como llegó a serlo la idea del cambio, compartida por la izquierda y el centro, tanto demócrata cristiano como radical, por la Iglesia, por el grueso de la intelectualidad, por la cultura, etc. De allí que el conservadurismo pasara a ser visto como excéntrico, en alguna medida extemporáneo, lo que quedó expresado con el término "momio", sin perjuicio de lo cual dicha corriente tenía la misma legitimidad de todos los demás actores.

La derecha, que percibía con preocupación el ethos predominante, tampoco se embarcó todavía en la violencia política. Al menos no lo hizo en forma abierta. Ello sin perjuicio de los coqueteos del PN con las FF.AA., a las que intentaba interpelar. Y sin perjuicio de la simpatía que sintiera por el movimiento de Viaux, en el que seguramente estaba involucrada, sino en su conjunto, al menos mediante algunos de sus sectores más radicalizados. La esperanza en el golpe que empezaron a desarrollar muchos de sus prohombres quedó por el momento postergada ante la convicción de que ganarían las elecciones presidenciales de 1970.

En resumen, el rupturismo que asumieron algunos actores, así como también el protorrupturismo que adoptaron otros, no se tradujo en que a lo largo de la década misma se diera paso a una violencia política generalizada. Tampoco produjo un efecto tal el despliegue de la acción de los sujetos mesocráticos y populares en alza. Tanto unas como otras luchas, salvo casos minoritarios, se verificaron dentro de los marcos institucionales y de la confrontación cívica. Lo mismo, agreguemos, sucedió con las transformaciones introducidas por el Gobierno del Presidente Frei.

En este sentido, no cabe confundir la agudización de las luchas sociales y políticas con la violencia política generalizada. Lo primero efectivamente ocurrió durante los 60, en particular durante su última parte, pero no así lo segundo.

7. LA COYUNTURA 1970-1973: LA RESOLUCIÓN DE LA LUCHA ENTRE LOS TRES PROYECTOS GLOBALES

Las cosas cambiarían durante la década siguiente. Desde ya las elecciones presidenciales de 1970 marcaron nuevamente un enorme involucramiento norteamericano. Las campañas del terror financiadas por Washington en contra de la candidatura de la izquierda enarrecieron el ambiente nacional y sembraron nuevas semillas para la confrontación.

Esto se vio acentuado al producirse el triunfo de la Unidad Popular. Entonces, el Departamento de Estado, en particular el Presidente Nixon y Henry Kissinger, tomaron rápidamente medidas conducentes a la organización de un golpe militar que impidiera el ascenso de Salvador Allende a la Presidencia. La misión le fue encomendada a la CIA, la que montó las operaciones denominadas Track I y Track II. Sus efectos inmediatos fueron la fallida intentona golpista del general Viaux y de grupos de la extrema derecha nacionalista, que culminó con el rapto y asesinato del comandante en jefe del Ejército, René Schneider, defensor de las posiciones constitucionalistas dentro de la institución. De este modo, la violencia política empezó a ser una realidad.

Fracasados los intentos norteamericanos por impedir el ascenso de Salvador Allende a la Presidencia y los esfuerzos de la derecha por bloquear su elección en el Congreso Pleno, el Presidente electo asumió su cargo. Se comenzó entonces a llevar a cabo un esfuerzo por materializar lo que aparecía como el proyecto global de la izquierda, del mismo modo como los gobiernos de Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva habían hecho un esfuerzo análogo en función de los proyectos que cada uno representaba.

Pero EE.UU., por razones geopolíticas, no estaba dispuesto a que un proyecto anticapitalista se implementara en su zona de influencia. Por lo mismo, sus anteriores esfuerzos por abrir paso a un golpe de Estado persistieron, aunque con adecuación a las nuevas condiciones.

Por otra parte, el triunfo de la Unidad Popular (UP) y el subsecuente intento por llevar a la práctica el que aparecía como el proyecto global de la

izquierda dio pie a una radicalización de las posiciones del gran empresariado y de la derecha. Fue en tales circunstancias históricas cuando ésta pasó desde su prorrupturismo de fines de los 60 hacia un rupturismo abierto. En esa línea, vinculada estrechamente a las acciones impulsadas por las organizaciones corporativas del gran empresariado y al Departamento de Estado, se esforzó por deslegitimar el marco institucional de los conflictos con el fin de abrir paso a la intervención de las FF.AA. a través de un golpe de Estado. Por cierto, previa creación de las condiciones requeridas para ello. Estas condiciones suponían por un lado, conseguir la unidad opositora, y, por el otro, establecer sobre esa base la anormalidad en el sistema político, apoyada por el despliegue de un movimiento gremial y huelguístico animado por el grueso de las clases medias y la pequeña burguesía, orientados a imponer la ingobernabilidad. Lo cual suponía una exacerbación de los ánimos de esos sectores sociales en contra del Gobierno, cuestión que se conseguiría mediante el desquiciamiento psicológico masivo a través de la prolongación, bajo nuevas modalidades, de las campañas del terror inauguradas por EE.UU. durante los comicios presidenciales de 1964. Todo ello se llevó sistemáticamente a la práctica mientras que el Gobierno, por su parte, intentaba cumplir su programa de transformaciones.

Como resultado de ello todos los conflictos existentes se agudizaron. Y se avanzó hacia la coyuntura en la que se resolverían las luchas derivadas del agotamiento del patrón mesocrático sustitutivo de importaciones, resolución que, por su forma y contenido, sellará el perfil de toda la segunda mitad del siglo XX.

¿Cuál sería el proyecto triunfante? ¿Tal resolución se haría dentro del contexto del Estado de compromiso y de los marcos institucionales que le eran propios, o bien mediante su radical ruptura? ¿Supondría formas gradualistas e institucionales de solución, o bien formas violentas y extrainstitucionales? ¿Era fatal que la solución a estos conflictos adoptara una forma determinada, fuese ésta institucional o rupturista?

A mi juicio, la respuesta a estas últimas interrogantes vendrá determinada por el comportamiento de los actores políticos, en particular por el tipo de partidos que entre 1970 y 1973, tanto en la oposición como en el Gobierno, terminará predominando. Es decir, por el hecho de si impondrían su sello al conflicto político las colectividades gradualistas e institucionales o bien las rupturistas. Los factores internacionales, es decir, la política norteamericana encaminada a abrir paso a un golpe de Estado, se vería claramente afectada por aquello, precisamente por cuanto en gran medida requería actuar mediante actores internos. Un centro transaccional no era adecuado a sus objetivos. Si lo era uno polarizante capaz de confluir con el rupturismo de la derecha a propósito de los temas del "totalitarismo marxista" y otros similares. Tampoco le era conveniente el predominio de una izquierda gradualista e institucional, sino el de una izquierda rupturista pues ésta permitía articular resistencias más amplias –en particular cimentar la unidad del PN y el PDC– y justificar de manera más fácil el golpe.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el desarrollo de esta fase agudizada del conflicto político chileno se dio en un contexto internacional caracterizado por sus ya enormes niveles de globalización. Pese a que en esos años se vivía una fase de distensión en la pugna entre las grandes potencias, el conflicto Este-Oeste obviamente persistía con mucha fuerza. En ese sentido, dado el hecho de que Chile se encontraba dentro de la órbita norteamericana, EE.UU. jugó un rol importante en el conflicto interno del país, apoyando y financiando activamente a las fuerzas contrarias a la izquierda y estimulando y "monitoreando" a los elementos golpistas de las FF.AA., que siguieron conspirando...¹⁹ mientras que la URSS prácticamente no jugó ningún papel relevante en él pues nuestro país no se encontraba en su zona de influencia. Además, la URSS se hallaba empeñada en una política de coexistencia pacífica con los EE.UU., cuyos resultados no estaba dispuesta a arriesgar en aras de los acontecimientos que ocurrían en una nación lejana y pequeña. Más aún cuando la vía chilena era la heterodoxia misma e, implícitamente, cuestionaba el modelo soviético. Salvador Allende, en efecto, era un Dubcek, cuyas concepciones sobre un socialismo sin dictadura del proletariado y con libertades políticas incluso para la oposición, eran vistas como inviables por la ortodoxia de Moscú. Cuba, por su parte, que a través de su revolución había amenazado la hegemonía norteamericana en la región, carecía de suficiente fuerza como para influir en los asuntos chilenos –como no fuese a través de cierto ideologismo que había permeado esencialmente al PS y al MIR– y que, de hecho, más allá de cualquier formalidad, enfrentaba la hostilidad del PC.

Pues bien, la agudización de todos los conflictos que se produjeron durante el Gobierno de la UP, con la correlativa polarización del cuadro político, se tradujo en una rápida reestructuración del escenario partidario. En efecto, se terminó rompiendo el esquema de los tres tercios implantado en los 60, el que fue reemplazado por la conformación de dos grandes bloques: oposición y Gobierno.

Los partidos eje de cada bloque eran el Nacional y el Demócrata Cristiano por un lado, los que con posterioridad, junto a otras entidades menores, formarían la Confederación Democrática (CODE); y el Socialista y el Comunista, por el otro, núcleos de la Unidad Popular. Adjunto a cada bloque existían formaciones políticas extremadamente radicalizadas que desde el comienzo intentaron resolver el conflicto por la vía extrainstitucional. Tal fue el caso de Patria y Libertad, en lo que se refiere al bloque opositor, y del MIR, en el de las fuerzas que constituían la Unidad Popular.

Pero, obviamente, los señalados bloques distaban mucho de ser homogéneos. En efecto, los partidos eje de cada uno de ellos estaban entre sí enfrentados por serias diferencias, que eran la expresión del hecho de que cada uno era portador de proyectos distintos. Ello era explícitamente reconocido en lo que se refiere al PN y la DC, cuya unidad mayor o menor fue gradualmente forjándose de facto como producto de la dinámica de la propia lucha política, puesto que en los comienzos del Gobierno de Allende ambos partidos aparecían como en-

tidades opuestas, cuando no antagónicas. En cambio, en el caso de la izquierda, en particular entre el PC y el PS, no había conciencia en ellos de que representaban proyectos distintos, por lo cual formalmente aparecían como la base política de un proyecto común.

Las diferencias mencionadas al interior de ambos bloques se materializaban en diseños políticos y en tácticas particulares y diferenciadas. Más precisamente aún, tales diferencias explicitaban el hecho de que al interior de cada uno de los bloques existían colectividades de concepción rupturista y otras de concepción gradualista e institucional.

En la UP tal dualidad quedó expresada esencialmente en la dicotomía conformada por el rupturismo del PS, cercano al MIR, y el gradualismo del PC, más conectado con los puntos de vista prácticos del Presidente Salvador Allende. Y en la oposición tal dualidad se explicitó a plenitud cuando el PN, durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende, pasó rápidamente desde su protorrupturismo de los sesenta, a un rupturismo abierto, que en ciertas oportunidades lo llevará a coincidir con Patria y Libertad. Ello contrastaba con el gradualismo institucional de la DC, al que el PN sometió a constante crítica como parte de su permanente intento por cooptarlo, cosa que finalmente conseguiría.

El Gobierno de hecho puso en práctica las concepciones del sector gradualista e institucional de la UP, cuyo principal representante era precisamente el mismo Allende. Coherente con ello llevó adelante el proceso de cambios dentro de los marcos delimitados por la Constitución. En ese contexto, las fuerzas opositoras hicieron uso de todas las garantías que aquella otorgaba: libertad de asociación, de reunión, de prensa, de huelga, de pensamiento, etc. Los poderes públicos funcionaron a plenitud. El mismo Parlamento se convirtió en un baluarte opositor. Cuando correspondió, sus representantes se renovaron mediante elecciones libres. El Estado de Derecho fue respetado rigurosamente, pese a que en particular la derecha, como parte de su estrategia orientada a abrir paso a un golpe militar, intentó permanentemente convencer al país de lo contrario.

En ese cuadro, el Presidente Salvador Allende, apoyado por el sector gradualista e institucional de la UP, permanentemente buscó el acuerdo con el PDC, con el fin de darle una base jurídica y política más sólida al proceso de cambios. Pero ese partido, presionado por su sector conservador, por la derecha, por EE.UU. y por el desplazamiento de las capas medias en contra del Gobierno, no respondió a tales desafíos. No se avino a la lógica transaccional propuesta por el Presidente de la República en sucesivos diálogos a que lo convocara. Y con ello contribuyó a la estrategia del PN y de EE.UU. dirigida a la deslegitimación del marco institucional de los conflictos, cuyo supuesto era polarizar el escenario político para así abrir paso al golpe.

No es menos cierto que la retórica ultrarrevolucionaria del PS y del llamado Polo Revolucionario, cuestionó permanentemente el rumbo del Presidente Allende y obstaculizó el acuerdo que el mandatario buscaba con el PDC, al mismo tiempo que proporcionaba argumentos al rupturismo de la derecha.

La dualidad entre gradualismo y rupturismo al interior de los bloques en que terminó dividiéndose la política chilena hizo, por tanto, que el comporta-

miento de los partidos políticos dentro de este período estuviese caracterizado no sólo por una lucha entre ambos bloques, sino también por agudos conflictos al interior de cada uno de ellos, así como entre sus partidos eje y las formaciones extrainstitucionales que críticamente les eran adjuntas. A ello hay que agregar los conflictos internos que se dieron al interior de cada colectividad, con excepción, quizás, del PC.

Pues bien, a mi juicio, en ese marco, y sin desconocer las virtualidades polarizadoras contenidas en el programa de la UP, la extrema radicalización de los conflictos que de hecho se verificó durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende, vino finalmente al menos determinada por los siguientes elementos:

Primero. Por la gran habilidad táctica del sector rupturista de la oposición, es decir, del PN, el que no sólo orientó a su base social en una perspectiva desestabilizante y deslegitimadora del marco institucional de los conflictos a través de la creación de una sensación de inseguridad, miedo y anormalidad, con su correspondiente desquiciamiento de la psicología social del país, sino que también intentó para ello sumar a las fuerzas sociales en que se apoyaba el PDC. De tal modo terminó cooptando a este partido en vistas a crear las condiciones para un golpe militar que le permitiría no sólo detener el proceso de cambios en curso, sino también implementar su propio proyecto de modernización capitalista.

Segundo. El enorme rol desestabilizador que jugó el Gobierno de EE.UU. a través de la CIA, los que mantuvieron firme su orientación hacia el golpe de Estado a través de múltiples acciones encubiertas, financiando a los partidos opositores, a los gremios y sus paros desestabilizantes, apoyando a los militares golpistas y las "campañas del terror" destinadas a exacerbar el miedo en la población, etc.

Tercero. El considerable peso que, a su vez, las fuerzas rupturistas alcanzaron en la izquierda (en el llamado Polo Revolucionario), las que al igual que las de la derecha, impulsaban una política que contribuía a deslegitimar el marco institucional de los conflictos, negándose a la par, a toda solución de compromiso, con cuya retórica y práctica, por lo demás, obstaculizaban todo acuerdo de la UP con el centro, contribuían a crear las condiciones de ingobernabilidad que requería la derecha para dar paso un golpe de Estado y, en fin, bloqueaban los esfuerzos del Presidente Allende orientados a viabilizar lo que llamara la "vía chilena hacia el socialismo".

Cuarto. La influencia predominante en el PDC de sus sectores conservadores a partir del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic y de manera incontrarrestada a partir de mayo de 1973. Esto hizo posible la unidad de la oposición en una perspectiva factualmente desestabilizante, a la par que frustró los intentos de acuerdos llevados a cabo por el Presidente Allende con este partido. Tales hechos eran ilustrativos de la inexistencia de un centro pragmático capaz de dar, a través de un acuerdo moderado con el Gobierno, una contribución significativa a la despolarización del cuadro político.²⁰ En su lugar terminó perfilándose un centro ideologizado, antialiancista y con fuerte vocación de poder

—el PDC—, el que, pese a que en un principio aspiraba a conseguir sus metas sin romper el marco institucional, en razón de lo arriba señalado, de hecho y a su modo, terminó más bien contribuyendo a polarizar el escenario nacional más allá de lo que éste podía resistir.²¹

El Presidente Allende no pudo neutralizar todos esos factores adversos. Y el PC, principal partido del polo gradualista e institucional de la UP, tampoco. En parte por cuanto evidenció rigideces ideológicas que no le permitieron sacar las consecuencias teóricas de su práctica gradualista e institucional, proyectándola explícitamente hacia un modelo de socialismo conceptualmente nuevo, distinto al existente, como lo intuyera Salvador Allende. El PC, por el contrario, a contrapelo de su práctica, insistió en una ortodoxia teórica de origen soviético y en una adhesión acrítica a la URSS y al socialismo real. Esto, por cierto, le quitó capacidad de interlocución con el centro. Una actitud más flexible e independiente en estos planos hubiera sentado bases más sólidas para llegar a algún tipo de acuerdo con el sector progresista del PDC, aislando al rupturismo opositor y despolarizando el escenario político, cuestiones estas que el PC siempre intentó, aunque sin asumir todas las premisas conceptuales necesarias.

La mayor capacidad operativa del rupturismo sobre el gradualismo en la oposición le dio una determinada eficacia y sentido al quehacer de este sector, materializado en la postrera adhesión del PDC a un golpe blando. En cambio, en la izquierda el enfrentamiento entre gradualismo y rupturismo culminó en una especie de suma cero, que terminó por quitarle toda operatividad a la UP, haciéndola entrar en una crisis que acabó por anularla políticamente en las vísperas del golpe de Estado. En este sentido, como se dijo, el Polo Revolucionario contribuyó a quitar toda efectividad a las directrices del Gobierno y a crear el clima de descontrol requerido por el rupturismo opositor para dar paso a su salida militar. No es menos cierto que, a la vez, terminó representando ciertos fenómenos objetivos, como lo era la sensibilidad de determinados sectores populares que intuían que, cualquiera fuese el comportamiento de la UP, la vía legal del Presidente Allende tenía escasa chance ante la irrevocable decisión de los poderes fácticos de abortar el proceso de cambios mediante la fuerza y la violación del orden institucional. Tal creencia dio paso a la creación del llamado poder popular paralelo, uno de los fenómenos más notables de la historia política de Chile, que requiere ser estudiado.

En tales circunstancias, Salvador Allende finalmente fue desbordado tanto por la derecha —que arrastraba a un centro que se resistía a jugar su rol de tal, es decir, ser mediador— como por la extrema izquierda.

Al terminar teniendo más peso la lógica de los partidos rupturistas en el cuadro político, y al no existir un centro pragmático capaz de materializar un acuerdo estabilizador con el Gobierno —cuestión que permanentemente persiguió el Presidente Allende— se dio paso a la deslegitimación del marco institucional de los conflictos. Ello, por cierto, estimuló la crisis de la adhesión formal de las FF.AA. al orden constitucional, que venía desde los sesenta, crisis que

intentaba ser contenida por el cada vez más aislado mando constitucionalista encabezado por el general Prats.

En esa misma dirección operó, con mucha efectividad, la intervención norteamericana, la que, como se dijo, apoyaba financieramente al conjunto de la oposición, a los movimientos patronales y sus paros y, en fin, incentivaba las conspiraciones de la oficialidad no constitucionalista de las FF.AA. en la perspectiva de abrir paso al golpe que ya había intentado en octubre de 1970 en concomitancia con el general Viaux y otros sectores de extrema derecha.²²

Se generaron así las condiciones para un desenlace catastrófico, con victorias y derrotas totales, con la consiguiente liquidación no sólo del régimen democrático, sino también del llamado “Estado de Compromiso” instaurado en los treinta. Fue esto lo que finalmente vino a significar el golpe del 11 de septiembre.

Demás está señalar que tal desenlace en modo alguno era fatal. El que, no obstante, se haya abierto paso hay que entenderlo, a mi juicio, en conexión con las habilidades políticas, los recursos, la energía, la visión —o la carencia de ella— de los diversos actores del drama.

8. EL DESENLACE: LA INSTAURACIÓN DEL PROYECTO GLOBAL DE LA DERECHA Y EL GRAN EMPRESARIADO MEDIANTE LA DICTADURA MILITAR

LA DICTADURA militar que entonces se instaló en el país, luego de desarticular a los sujetos mesocráticos y populares, implantó a plenitud el que terminó siendo el proyecto global de la fuerza opositora rupturista, es decir, la derecha y el gran empresariado.²³ Ello por cuanto en el curso de la lucha precedente se había logrado establecer definitivamente lo que ya en los sesenta se propusiera construir el PN, es decir, la alianza duradera entre la derecha política, los militares y el gran empresariado, alianza que había logrado adicionalmente conseguir el apoyo de cierto sector de las clases medias y del grueso de la pequeña burguesía.

El PDC nada pudo hacer para evitar la identificación de la dictadura con la derecha, aunque lo intentó. En efecto, luego del golpe, dirigido por sus sectores más conservadores, en soterrada competencia con aquella, se esforzó por cooptar a los militares en función de sus propios fines. La colectividad postulaba una dictadura relativamente corta, la que luego de desarticular a la izquierda y “pacificar” al país, debía llamar a elecciones, en las que esperaba triunfar. En esa perspectiva, y con el desacuerdo de un sector disidente minoritario, no sólo apoyó el régimen sino que también envió a representantes suyos a defenderlo en el exterior. A la par, presionó a los militares para que el receso político fuera levantado a la brevedad con el fin de combatir a la proscrita izquierda con los medios de la política en la base social. Fracasó totalmente en ello. Las masivas

violaciones a los derechos humanos, que afectaron a su propia gente, unidas a la represión en su contra, lo obligaron a alejarse de la dictadura y pasar a la oposición durante la segunda parte de 1976.

De tal modo, la dictadura no respondería a los intereses del conjunto de la antigua oposición a la UP, sino sólo a los de un sector de ella: la derecha y el gran empresariado.

El PN, seguro de la tendencia que llevaban los acontecimientos, se autodisolvió inmediatamente después del golpe y delegó en las FF.AA. la tarea de reestructurar el Estado en un sentido autoritario y de implantar su proyecto de modernización capitalista. Con esa perspectiva, muchos de sus prohombres se integraron a la alta administración. Y cuadros técnicos suyos o vinculados a los grandes grupos económicos ocuparon puestos decisivos en la conducción económica. Mientras tanto, gran cantidad de militantes de las organizaciones de la extrema derecha se integraron a los servicios de seguridad y contribuyeron desde allí a la eliminación del "enemigo interno", es decir, a la erradicación física de los cuadros de los partidos de izquierda.

La implementación del proyecto de modernización capitalista por parte de la dictadura pronto hizo que se alejaran de ella importantes grupos de las clases medias que habían apoyado el golpe en la medida en que dicho proyecto afectaba negativamente sus intereses. También contribuyó a ello el temor generalizado que se instauró en el país, vinculado al masivo terrorismo de Estado que entonces se desató, el que era ajeno a las tradiciones nacionales y que respondía más bien al ideologismo antiliberal y nacionalista profesado tanto por los militares como por la derecha.

En esas condiciones la dictadura militar llevó a cabo una profunda reestructuración del Estado poniendo fin a la vigencia de la Constitución de 1925. La esencia de esa reestructuración consistió en: 1) la inserción de las FF.AA. en los dispositivos del poder político, cuestión que en la Constitución de 1980 quedará resumida en el concepto de "garantes de la institucionalidad"; 2) la erradicación de los representantes de los actores mesocráticos y populares, es decir, de las fuerzas de centro e izquierda, de las instancias estatales; 3) como contrapartida, el posesionamiento íntegro de éstas por parte de los sectores de derecha, y 4) la construcción de un régimen político antiliberal que excluyera la posibilidad de que en el futuro sujetos mesocráticos y populares le disputaran el poder a los sectores conservadores y del gran empresariado.

Visto a largo plazo, el significado fundamental de este desenlace representó la resolución exitosa del desafío al que fueron sometidas las clases altas de la sociedad desde mediados de los cincuenta en adelante por parte de los sujetos mesocráticos y populares en alza y sus correspondientes proyectos globales. Dichas clases fueron capaces de evitar su aislamiento, de crear en torno a sus intereses un blindaje social, político y cultural, en el que les cupo un rol muy importante al empresariado no monopolístico, a la pequeña burguesía y a mayoritarios sectores de las clases medias. Y, obviamente, a las FF.AA., sin cuya alianza tácita difícilmente habrían podido triunfar e imponer su propio proyecto global.

Sobre la base constituida por el Estado reestructurado bajo la égida militar se implantó entonces el nuevo patrón de desarrollo: el neoliberal, el que definitivamente reemplazó al mesocrático sustitutivo de importaciones agotado a comienzos de los cincuenta. El nuevo patrón de desarrollo podrá desplegarse durante el resto del siglo sin encontrar fuerzas significativas que lo cuestionaran en su esencia.

9. EL FIN DEL SIGLO: DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR A LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CAPITALISTA DE LA DERECHA Y EL GRAN EMPRESARIADO

DENTRO DEL nuevo patrón de desarrollo impuesto por los uniformados es posible distinguir dos fases claramente diferenciables. La primera, que corresponde a la dictadura militar, se extendió entre 1973 y 1990. Y la segunda, que se verificó bajo los gobiernos concertacionistas, abarcó desde esta fecha en adelante.

A su vez, dentro de la fase correspondiente a la dictadura militar, es posible distinguir dos subfases. La primera se extendió desde el golpe mismo hasta el estallido de las protestas nacionales en mayo de 1983. Durante ella se revirtieron en primer lugar las medidas anticapitalistas del régimen anterior. Y paralelamente se procedió a llevar a cabo un intento de destruir a los sujetos populares y mesocráticos. En función de esto, la dictadura militar utilizó cuotas inéditas de prolongada violencia estatal, traducida en un sostenido intento por eliminar físicamente la dirigencia de los partidos de izquierda y de los cuadros sociales en que se apoyaran. El resultado principal de dicho esfuerzo fueron los detenidos desaparecidos. Los marcos ideológicos legitimadores de tal empeño fueron proporcionados por la ideología antiliberal de la derecha nacionalista recepcionadas al interior de los cuarteles, más las doctrinas norteamericanas de la Seguridad Nacional. Ambas para estos efectos articuladas en torno al concepto de "enemigo interno".

De otra parte, esta subfase se caracterizó por la implantación del proyecto de modernización capitalista de la derecha y el gran empresariado. Incluyó también el diseño institucional autoritario y antiliberal materializado luego en la Constitución de 1980, con su correspondiente definición de los militares como garantes de la institucionalidad.

La segunda subfase, es decir, la que se abrió con las protestas nacionales y culminó en 1990, tuvo por contenido fundamental la crisis de la dictadura. Ante la disruptiva reemergencia de los sujetos populares y mesocráticos, aquélla se demostró incapaz de proporcionar gobernabilidad al proyecto global que implantara, por lo cual, finalmente, la consolidación del mismo debió asociarse al cambio de la superestructura política existente. Es decir, a la sustitución pactada de la dictadura militar y a su reemplazo por regímenes civiles en el contexto de restauración de las libertades públicas.

Este proceso estuvo factualmente mediado por EE.UU. En efecto, la forma específica en que se verificó el paso desde la dictadura a los gobiernos civi-

les se debió en gran medida a la ingeniería política del Departamento de Estado, estrechamente asociado a los partidos de centro, especialmente al sector más conservador de la DC, y a la Iglesia Católica.

Ello se explica en gran medida en virtud de que la subfase de crisis de la dictadura militar representó serios peligros para los intereses norteamericanos en la subregión, puesto que abrió posibilidades para que se potenciara una opción radicalizada encabezada por la izquierda, en particular por el PC, que podría terminar en una salida insurreccional. En ese contexto, el Departamento de Estado se dio a la tarea de proporcionar un paraguas a la oposición de centro. Estimó que era necesario contribuir a la reconstitución de la clase política centrista —hasta el momento dispersada por la dictadura— en la perspectiva de un futuro recambio pactado del régimen dictatorial que fuera confiable para sus intereses regionales.

La ingeniería del recambio de centro contempló los siguientes elementos principales. Primero, la creación de un espacio político que permitiera la rearticulación de la clase política centrista y la elaboración de su propuesta. Ello supuso fuertes presiones norteamericanas sobre la dictadura, que debían garantizar lo anterior. Segundo, el aislamiento del PC. No debía realizarse ninguna acción conjunta con él, y, por el contrario, se requería propender a levantarle a sus aliados para una salida de centro. Tercero, la reconstitución de la clase política centrista, con su correspondiente propuesta, debía dar paso a una negociación con la dictadura, en parte mediada por la reemergente derecha política y por la misma Iglesia Católica. Los contenidos fundamentales del acuerdo a construir debían contemplar a lo menos: a) la mantención del general Pinochet en el poder hasta 1989, y b) el desempeño de la oposición centrista al interior de la Constitución de 1980, lo que suponía utilizar el plebiscito de 1988 y las elecciones presidenciales de 1989, lo que desembocaría en el recambio. Paralela o sucesivamente a ello podrían realizarse ajustes constitucionales que reflejaran en el plano jurídico la transición operada.

Venciendo resistencias incluso al interior de la oposición de centro —muchos de cuyos componentes no estaban dispuestos a esperar hasta 1988—, la salida norteamericana fue la que finalmente se llevó a la práctica. En efecto, luego de haber ganado el plebiscito de ese año y las presidenciales del año siguiente —y después de que se negociaran ciertas reformas parciales a la Constitución de 1980—, la Concertación asumió el Gobierno en 1990, dando paso a la llamada “transición”. No fue casualidad que, entonces, Washington definiera a la transición chilena como “ejemplar” y que, como tal, la exhibiera en los foros internacionales.

Esta verdadera salida pactada contó con otro acuerdo, muy importante, aunque no escrito, entre la clase política de centro y la de la derecha. Dicho acuerdo estableció que lo que cambiaría sería la superestructura política del proyecto de modernización capitalista implantado en los años anteriores, pero no éste como tal, al que a lo sumo podrían introducirse ajustes secundarios.

Ahora bien, el éxito de la salida norteamericana en Chile estuvo, por cierto, vinculado a grandes transformaciones internacionales. En particular a la cri-

sis y posterior derrumbe del socialismo real, lo que trajo consigo el desprestigio de todo el ideario anticapitalista y la emergencia de EE.UU. como la única superpotencia mundial, cuyo peso en la región se vio redoblado. Todo, por cierto, en el contexto de un nuevo nivel de la globalización capitalista resultante de los vertiginosos avances de la tecnología.

Esos fenómenos fueron los que, en último término, estuvieron en la base de la metamorfosis de los actores políticos nacionales tanto de centro como de izquierda. Culminando procesos iniciados en la última parte de los setenta, en efecto, ellos abandonaron sus utopías anteriores y se adecuaron a las nuevas realidades. Tal cosa fue lo que se materializó a través de lo que inicialmente se denominó como “renovación socialista”, la que dio paso al aislamiento del PC y a la alianza de la izquierda no comunista con el PDC, el que, a su vez, renunció a su comunitarismo de antaño. Todo esto, por otro lado, bajo el patrocinio norteamericano, hizo posible el acuerdo de esta alianza de centroizquierda, ya sin verdadero proyecto propio, con la derecha, que sí lo tenía.

El conjunto de los procesos descritos creó entonces las condiciones para que el proyecto de modernización capitalista instaurado por la dictadura militar pasara a ser administrado por los civiles. Con lo que ganaría la legitimidad y la estabilidad que los militares no le habían podido finalmente otorgar. Se avanzó así hacia la fase de consolidación de ese proyecto, el que de tal modo vio sustancialmente ampliadas sus bases sociales y políticas de apoyo mediante la factual adhesión a él de la Concertación.

Ésta, por su parte, fue una alianza conformada por el grueso de la clase política derrotada en 1973. Es decir, la alianza de la DC con la mayoría de la ex UP, más algunas incrustaciones del MIR (Ominami y otros), todos ya metamorfoseados. Según lo explicado arriba, será este bloque, entonces, el que a partir de 1990 pasará a administrar el proyecto de modernización capitalista de la derecha y del gran empresariado. Todo, por cierto, en medio de la restauración de los consensos al estilo de los que se habían perdido con la crisis del patrón mesocrático sustitutivo de importaciones. No es menos cierto que tales consensos no abarcaron un área política específica, a saber, la relativa a la mantención de los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980, tema que quedará pendiente.

Coherente con lo anterior, se podría decir que la esencia del esquema implantado con los Gobiernos concertacionistas radicó en lo que uno de sus principales ideólogos, Eugenio Tironi, denominara como el “modelo americano”. Es decir, un esquema caracterizado por la existencia de “dos fuentes de dirección alternativa de un mismo orden socioeconómico, mas no propuestas de modelos antagónicos”. Como en EE.UU., donde, señala Tironi, “un gobierno demócrata es muy diferente de uno republicano, pero bajo cualquiera la sociedad americana sigue siendo básicamente la misma”.²⁴ Dicho de otro modo, un mismo proyecto, el de la derecha y el gran empresariado, pero con administraciones eventualmente alternativas: la de la Concertación y la de la derecha, las que compiten al efecto. Tal fue el punto de llegada.

No obstante, la normalidad de este esquema, ya plenamente instalado, vino interferida por las dificultades existentes para sellar el problema de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la dictadura durante la implantación del proyecto en curso. Sus secuelas bajo el régimen concertacionista consistieron no sólo en la exigencia de los familiares de las víctimas y de la izquierda extraparlamentaria en torno a la demanda de verdad y justicia, sino también en la reacción de un Poder Judicial deseoso de reivindicarse de sus actuaciones pasadas. Ello, en fin, se tradujo en el llamado "desfile militar" por los tribunales y el mismo enjuiciamiento al general Pinochet. Esto produjo roces entre la Concertación y la derecha, entre las FF.AA. y el mundo civil, y también la desconfianza de un ideologizado empresariado que tiende a ver en ello un signo de cuestionamiento del modelo en curso. Resolver estos problemas, otorgar las confianzas pertinentes y dejar atrás todo lo relativo a dicho tema es una cuestión en la que el conjunto clase política se empeña.

Se completó de este modo el ciclo de sustitución de un patrón de desarrollo por otro, cuestión que, desde nuestra óptica, animara las luchas de toda la segunda mitad del siglo XX. Éste, pues, llegó a su fin con dicho proceso claramente consolidado.

Ello, sin embargo, vino aparejado a otros fenómenos entre los que cabe mencionar la desaparición o jibarización de los sujetos mesocráticos y populares, de los proyectos alternativos y de los horizontes utópicos. Todo lo cual se complementó con una especie de privatización de la vida, con una cultura de soluciones individuales mediadas por el acceso al mercado como sujeto consumidor, reforzándose así una emergente crisis de credibilidad al ejercicio de la política.

La esencia de la crisis de ambas consistió en que en parte perdieron su finalidad principal. El objeto de una y otra, esto es, el debate sobre las alternativas sociales, quedó cancelado por los consensos existentes. Adicionalmente, las verdaderas decisiones dejaron de tomarse en el plano político. En efecto, el ámbito de las decisiones políticas —verificadas, por lo demás, siempre entre cúpulas— quedó acotado por aquello que era compatible con los intereses de grandes poderes fácticos. De allí que, más allá de la buena voluntad de muchos, la verdadera política terminará quedando limitada, como señala Moulián,²⁵ a lo mediático, a lo menos trascendente, a la administración y, en fin, a las pugnas por la repartición de las cuotas de poder entre los miembros del personal dirigente. En tal calidad, perdió interés para las personas. Incluso más, se hizo moralmente sospechosa. Ello dio lugar a su desprestigio, a la falta de perfilamiento y representación de los partidos y, en fin, a la indiferencia generalizada.

La segunda mitad del siglo XX terminó en medio de este escepticismo y de esta apatía cívica, aparentemente interrumpida por el carisma del tercer candidato triunfante de la Concertación en las presidenciales del 2000. ¿Pero cuánto tiempo durará ese fervor?

NOTAS

¹ Algunos párrafos de esta introducción pertenecen a mi anterior libro, *Los partidos políticos y el golpe del 11 de Septiembre* (Santiago, CESOC, 2000).

² Para un análisis de la estructura económica, social y política de este periodo, véase Enzo Faletto, Eduardo Ruiz y Hugo Zemelman, *Génesis histórica del proceso político chileno* (Santiago, Quimantú, 1973), p. 8 y ss.

³ Véase Hernán Ramírez Necochea, *Las Fuerzas Armadas y la política en Chile* (México D.F., Cultura SEP, 1984), p. 163 y ss. También, Juan Contreras, "El Ejército en la política chilena: 1826-1925", revista *Araucaria*, N° 44.

⁴ Para una visión del Estado de compromiso, véase Tomás Moulián, "Desarrollo social y Estado de compromiso, desajustes y crisis estatal en Chile", en *Democracia y socialismo en Chile* (Santiago FLACSO, 1983), p. 105 y ss.

⁵ Respecto de esta evolución del PC, véase María Soledad Gómez, *El Partido Comunista de Chile: factores nacionales e internacionales de su política interna: 1922-1952* (Santiago, FLACSO, 1984), p. 5 y ss. Para el PS, Julio César Jobet, *El Partido Socialista de Chile* (Santiago, Prensa Latina, 1971).

⁶ Óscar Muñoz en el libro *Chile y su industrialización* (Santiago, CIAPLAN, 1986), analiza distintas tesis sobre el agotamiento del proceso de industrialización sustitutiva durante los cincuenta. Véase el capítulo VI.

⁷ Mario Góngora en el *Ensayo histórico* usa el concepto de "programaciones globales", sosteniendo que éstas se dieron entre 1964 y 1980. Carlos Bascuñán y otros, en *Chile en el siglo XX* (Santiago, Emisión, s.f.), utiliza el de "proyectos globales", que hacemos nuestro.

⁸ En el que formalmente aparecía como el proyecto de la izquierda, sin embargo, de hecho coexistían al menos dos proyectos distintos, pero que no se percibían como tales.

⁹ En cuanto a este punto, en relación a la derecha existen dos visiones opuestas. Una sostiene que ella carecía de proyecto modernizador y que se mantenía en posiciones defensivas y tradicionales, cuidando más bien de sus intereses de corto plazo. Tal es la tesis que argumenta Tomás Moulián en el capítulo "Desarrollo político", ob. cit. Para la visión opuesta, es decir, la que sostiene que la derecha poseía ya en los 50 un proyecto de modernización, véase de Sofía Correa, "Algunos antecedentes históricos del proyecto neoliberal en Chile (1955-1958)", en *Opciones*, N° 6; y "La derecha en Chile contemporáneo: la pérdida del control estatal", *Revista de Ciencia Política*, N° 1. Nuestro planteamiento comparte esta segunda visión, vol. XI, Stgo.

¹⁰ Jorge Ahumada, *En vez de la miseria* (Santiago, Ed. del Pacífico, 1958).

¹¹ *Ibidem*, p. 13.

¹² *Ibidem*, p. 14.

¹³ *Ibidem*, p. 15.

¹⁴ Véase al respecto, informe del Senado de los EE.UU., "Acciones encubiertas en Chile", en Armando Uribe y Cristián Opaso, *Intervención norteamericana en Chile. [Dos textos claves]* (Santiago, Editorial Sudamericana, 2001), p. 233 y ss.

¹⁵ Carlos Prats, *Memorias. Testimonios de un soldado* (Santiago, Pehuén, 1985), p. 61.

¹⁶ Véase "Acciones encubiertas...", ob. cit., p. 233 y ss.

¹⁷ Véase *La Nueva República*, propuesta programática del Partido Nacional para las elecciones presidenciales de 1970 (Santiago, 1970).

¹⁸ Sobre la crisis de hegemonía de la derecha durante los sesenta, véase Sofía Correa, "Iglesia y Política: el colapso del Partido Conservador", revista *Mapocho*, N° 30, Stgo.

¹⁹ Sobre la intervención norteamericana en los asuntos internos de Chile, véase *Intervención norteamericana en Chile*, ob. cit.

²⁰ Véase Arturo Valenzuela, *El quiebre de la democracia en Chile* (Stgo., FLACSO, 1989).

²¹ Véase Arturo Valenzuela, ob. cit.

²² Véase "Acciones encubiertas en Chile".

²³ Al hacer esta afirmación partimos del supuesto de que en las décadas del cincuenta y del sesenta el proyecto neoliberal todavía no se había desarrollado e impuesto en el seno de la derecha, pese a que elementos propios de él existían en abundancia en los postulados de este sector. Como se señalará más adelante, la concepción neoliberal sólo se impuso definitivamente en la derecha entre 1970 y 1973 como parte integrante de un proyecto a